

2.7. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN CANTABRIA (pp. 2-7)

—

2.7. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A CANTÀBRIA (pp. 8-13)

MARCOS GÓMEZ PUENTE

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad de Cantabria

En el periodo al que se contrae la presente crónica se han hecho públicos diversos pronunciamiento judiciales que, aun siendo de fecha anterior a dicho periodo, deben comentarse ahora.

Así, la *STSJ Cantabria de 22 de enero de 2009* anuló una modificación de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Santiurde de Toranzo promovida a instancias de una empresa hormigonera. La modificación convertía en suelo rústico ordinario unas fincas previamente calificadas como suelo rústico de protección especial (agropecuaria), para «dar al suelo la clasificación adecuada a la actividad que sobre el mismo se realizaba y así no perjudicar a la empresa instalada en él». En estos términos, como se comprende, la modificación se antojaba carente de justificación objetiva y arbitraria, ejercitándose las potestades urbanísticas no para dar a los terrenos una clasificación acorde con su naturaleza, sino para posibilitar una actividad industrial que era imposible en ellos.

Así, la Sala recuerda que el *ius variandi* que asiste al planificador urbanístico (reconocido por reiterada jurisprudencia —entre otras, SSTS de 3 de julio de 2007, 13 de febrero de 1989 y 8 de mayo de 1986—) tiene los límites propios de cualquier decisión discrecional y en ningún caso puede justificar la pura arbitrariedad. En este sentido y por lo que respecta a la clasificación del suelo, debe tenerse presente que la planificación no puede desconocer los criterios legalmente establecidos para determinar la naturaleza o clase de los terrenos, con los que se limita la discrecionalidad del planificador. Por ello mismo, si con arreglo a dichos criterios se consideró, en un momento dado, que los terrenos reunían un valor agrícola, forestal o ganadero o valores paisajísticos, históricos o culturales que justificaba su clasificación como suelo rústico de protección especial, no parece que pueda alterarse esta clasificación para privarles de dicha protección sin acreditar la desaparición de los valores que en su día la propiciaron, lo que se traduce en la necesidad de motivar expresamente las razones de interés público que justifican dicho cambio, de modo que pueda valorarse su suficiencia. Son esas razones las que echa en falta la Sala, pues las alegadas por la Administración (razones de tipo técnico, empresariales o de creación de puestos de trabajo) resultaban insuficientes para privar a los terrenos de la protección que se les había dado anteriormente.

La *STSJ Cantabria de 29 de junio de 2009* declaró conforme a Derecho la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales del Ayuntamiento de Santander, impugnada por una asociación de defensa

de los derechos humanos por entenderla contraria al principio de seguridad jurídica y al principio de reserva de ley penal y por carecer el Ayuntamiento de competencia para dictar varios de sus preceptos. Todas las alegaciones de la recurrente, algunas vagas y de pura oportunidad (se impugna un precepto, por ejemplo, por considerarlo “poco acertado y eliminable”), fueron rechazadas por la Sala, confirmándose la legalidad de los preceptos de la Ordenanza que, por otro lado, adolece de defectos que pueden dificultar su aplicación efectiva, en lo que respecta al régimen sancionador que contempla. Por ejemplo, el precepto referido a los ruidos y olores (art. 9: “Todos los ciudadanos están obligados a respetar el descanso de los vecinos y a evitar la producción de ruidos y olores que alteren la normal convivencia”) se refiere sólo a los ciudadanos, por lo que no parece que pueda exigirse la obligación que enuncia a los extranjeros, de habitual presencia en la ciudad por razones turísticas y académicas. Y la utilización de conceptos tan ambiguos como el de “respeto al descanso de los ciudadanos” o el de “normal convivencia”, aunque su empleo sea conforme a Derecho, no va a facilitar la imposición de sanciones a los alborotadores de la movida nocturna. Otro tanto puede decirse de los ruidos desde vehículos (art. 11.2 “Los conductores y ocupantes de vehículos se abstendrán de poner a elevada potencia los aparatos de radio o equipos musicales cuando circulen o estén estacionados, evitando que las emisiones acústicas trasciendan al exterior”). O de la prohibición de cantar o gritar en la vía pública “por encima de los límites del respeto mutuo” (art. 13). A la vista de ellos, pues, cabe preguntarse si, con el entendimiento actual de los principios de legalidad y tipicidad sancionadoras, los tribunales estarán dispuestos a confirmar las sanciones impuestas, si es que se imponen, por la infracción de las prohibiciones indicadas.

La *STJS Cantabria de 27 de julio de 2009* da cuenta de un nuevo episodio del conflicto que mantienen los vecinos del ensanche y el Ayuntamiento de Santander, a cuenta del ruido que generan las actividades hosteleras y recreativas por la tolerancia municipal. En esta ocasión, la Asociación de Vecinos había obtenido una sentencia de un Juzgado condenando al Ayuntamiento a clausurar dos tiouvivos musicales establecidos, sin los títulos debidos, en una céntrica plaza. En cumplimiento de la sentencia el Ayuntamiento dictó la orden de clausura, que fue voluntariamente cumplida por los propietarios de los tiouvivos (cerrándose éstos más de seis meses después de dictarse la sentencia). Pero éstos, simultáneamente, solicitaron y les fue concedida una autorización municipal para establecerse nuevamente en la plaza pocos meses después. Ante tan pírrica victoria la

Asociación reclamó del Juzgado nuevamente la clausura de los tiovivos en ejecución de la sentencia dictada en su día, siendo nuevamente ordenada mediante el correspondiente auto. Contra este auto el Ayuntamiento interpuso el recurso de apelación que resuelve y estima la sentencia que nos ocupa y que resolvió revocarlo. Según el TSJ, el auto de clausura no se ajustaba a Derecho porque la sentencia en su día dictada podía considerarse cumplida, sin perjuicio de que, existiendo nuevo título para su apertura, pudiera haberse impugnado éste mediante el oportuno incidente de ejecución de sentencia, lo que no hizo la Asociación.

Las *SSTSJ Cantabria de 2 de marzo y 31 de julio de 2009* declaran conforme a Derecho la autorización ambiental integrada otorgada a una cementera, impugnada por varias asociaciones vecinales y ecologistas (ARCA entre ellas). Entre los motivos alegados por los recurrentes pueden destacarse dos: uno, el de la necesidad de someter a evaluación de impacto ambiental las instalaciones de la cementera, que la Sala resuelve negativa por aplicación del Derecho transitorio; el otro, la supuesta vulneración del RAMINP (por no cumplirse el régimen de distancias a núcleos de población previsto en el mismo) que la Sala descarta por entender que el control que posibilitaban las disposiciones del RAMINP ha quedado comprendido en el propio procedimiento de la autorización ambiental integrada y que, por tanto, son las disposiciones por las que debe regirse ésta y los condicionamientos ambientales que resulten de la misma (superándose el más simple régimen tuitivo de las distancias) los que han de tenerse en cuenta.

La *STSJ Cantabria de 29 de septiembre de 2009* resuelve el recurso planteado por un particular al que se denegó la autorización para instalar un invernadero florícola en una finca rústica situado dentro del entorno de protección del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (declarado por Ley 4/2006, de 19 de mayo) e incluida por el PORN en la zona de uso moderado (sujeta a menores restricciones que la zona de especial protección). El particular entendía que el invernadero era compatible con dicho uso moderado, lo mismo que otras instalaciones, establos y huertas tradicionalmente existentes en las fincas colindantes. El Gobierno cántabro, por el contrario, entendía que la instalación pretendida no se acomodaba a los usos previstos para esa zona, pues no podía considerarse tradicional en ella (como lo eran los pastizales y aprovechamientos agropecuarios o silvícolas) y podría tener un impacto relevante tanto desde el punto de paisajístico como ecológico (esto último, por la utilización de plaguicidas, herbicidas y abonos químicos inherentes al propio sistema de

producción), siendo ésta la tesis finalmente aceptada por la Sala a la vista de las determinaciones del PORN (prohibiendo, entre otros usos, la eliminación de la cubierta arbórea o arbustiva y la construcción de cerramientos y otras estructuras artificiales), sin que el hecho de que puedan haberse cometido infracciones del régimen de uso en otras fincas anejas justifique la autorización de una instalación contraria a dicho régimen.

A las sentencias del Tribunal cántabro hasta aquí mencionadas ha de sumarse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sentencia de 4 de septiembre de 2009, confirmando en sede de apelación una Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 1 de Burgos, de 23 de enero de 2009, que no encontró motivos para revocar la decisión de la Comunidad de Castilla y León de negarse a atender el requerimiento que le había dirigido la Comunidad cántabra para que anulase tres autorizaciones para la instalación de sendos parques eólicos.

La Comunidad cántabra pretendía que se declarasen nulas dichas autorizaciones por la manifiesta incompetencia de la Comunidad castellano-leonesa para efectuar las evaluaciones de impacto ambiental exigidas para su otorgamiento. Al parecer de aquélla, la proximidad de los tres parques permitiría considerarlos, de facto, como uno solo, de modo que, por ser su conjunta potencia instalada superior a 50 MW, su producción eléctrica debería ofertarse al operador de mercado con la consecuencia legal (prevista, por relación con el art. 23 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en el art. 111 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica) de tener que entender que tal aprovechamiento afecta a más de una Comunidad Autónoma y que, por ello mismo, debería haber sido el Estado quien otorgara la autorización para su instalación y evaluara el impacto ambiental de la misma. La Comunidad consideraba, por tanto, que al autorizarlos por separado para sustraerlos de la competencia estatal se había incurrido en fraude de ley y, por ello mismo, pretendía que fueran declaradas nulas las autorizaciones.

El Juzgador de instancia rechaza tal argumento (que ya no se reitera en apelación) invocando el criterio sentado por la jurisprudencia del TS (SS. de 28 de marzo y 20 de abril de 2006) sobre el carácter unitario de los parques, apreciable cuando «los aerogeneradores en ellos agrupados necesariamente han de compartir, además de las líneas propias de unión entre sí, unos mismos accesos, un mismo sistema de control y

unas infraestructuras comunes (normalmente el edificio necesario para su gestión y subestación transformadora). Y, sobre todo, dado que la energía resultante ha de inyectarse mediante una sola línea de conexión del parque eólico en su conjunto a la red de distribución o transporte de electricidad –pues no se cumplirían los criterios de rendimiento energético y de un mínimo impacto ambiental si cada aerogenerador pudiera conectarse independientemente, con su propia línea de evacuación de la energía eléctrica producida, hasta el punto de conexión con la red eléctrica– no es posible descomponer, a efectos jurídicos, un parque eólico proyectado con estas características para diseccionar de él varios de sus aerogeneradores a los que daría un tratamiento autónomo». Teniendo presente este criterio, pues, y a la vista de la prueba practicada se descarta la consideración unitaria de los parques eólicos de autos, reconociendo la individualidad o autonomía de cada uno de ellos y, por tanto, teniendo todos ellos una potencia instalada inferior a 50 MW, la competencia autonómica para autorizar su instalación previa evaluación de su impacto ambiental.

La Comunidad cántabra alegaba también un defecto formal sustancial en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, por no habersele dado audiencia en el mismo a pesar de ser afectada en razón del impacto paisajístico de estos parques. Pero la legislación castellano-leonesa que regulaba específicamente el procedimiento para la declaración de impacto ambiental no preveía un trámite de audiencia individualizada, sino que articulaba la participación de los afectados a través de un trámite de información pública que fue efectivamente realizado y en el que pudo intervenir y alegar lo que considerara oportuno la Administración cántabra que, por otra parte, tuvo por diversos cauces conocimiento de la tramitación y compareció efectivamente en el expediente, de modo que, ni en la tramitación de la evaluación del impacto ambiental ni en la tramitación de las autorizaciones se le causó indefensión real y efectiva que pudiera justificar la invalidez de éstas.

Y, por último, estos fallos judiciales descartan también que la Comunidad castellano-leonesa haya ignorado los eventuales efectos sobre la región cántabra de los parques instalados en aquélla, por cuanto sí fueron tenidos en cuenta al evaluar el impacto ambiental y determinar las medidas correctoras propuestas referidas tanto al territorio burgalés como al cántabro, sin que pueda considerarse desconocida, en cuanto a este último, ninguna necesidad o exigencia específica. En este sentido, y por lo que hace al llamado territorio pasiego, los órganos judiciales han entendido que Cantabria no ha

acreditado suficientemente la existencia sobre dicho territorio de un impacto singular y específico, diferenciado del que se produce sobre territorio burgalés, meritorio de particular corrección (téngase en cuenta, a este respecto, que el territorio cántabro afectado no se hallaba sometido a ningún régimen de protección específico).

En cualquier caso, el litigio que acabamos de relatar evidencia el alcance supraterritorial de los impactos ambientales, indiferentes a las fronteras administrativas, y la necesidad ya de mejorar los cauces y técnicas de cooperación interadministrativa (inútiles si falta la voluntariedad y la disposición necesarias –de las que da ejemplo, por cierto, la propia legislación cántabra, al exigir a la Administración autonómica que remita a las demás CCAA el estudio ambiental de los planes o proyectos sujetos a control ambiental que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente de éstas –art. 14 Ley 17/2006–), ya de reconsiderar la idoneidad de algunas atribuciones competenciales cuando se evidencia que, por la natural contraposición de intereses territoriales o por puras dificultades organizativas y de gestión, aquellos cauces y técnicas se revelen insuficientes para resolver los conflictos o proporcionar una gestión unitaria y eficaz, constatándose la necesidad de abordarlos desde un enfoque supraterritorial.

En este último sentido parece oportuno traer a colación, aunque se tratara de un supuesto distinto, pues se refería al asentamiento de un mismo parque eólico sobre el territorio de dos Comunidades, no a la proyección del impacto ambiental de un parque asentado en una Comunidad sobre el territorio de la otra (aunque es evidente que, en ambos supuesto, el impacto ambiental se extendía por el territorio de las dos regiones implicadas), los razonamientos de la STS de 20 de abril de 2006 que, tras examinar las reglas de delimitación competencial en materia de energía, llegó a la conclusión de que correspondía a la Administración General del Estado autorizar la instalación de parques eólicos cuando éstos se extendieran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma (en contra el voto particular del Sr. Bandrés Sánchez-Cruzat).

En el període a què fa referència aquesta crònica s'han fet públics diferents pronunciaments judicials que, fins i tot, tot i ser de data anterior al període, han de comentar-se ara.

Així, la *STSJ Cantàbria de 22 de gener de 2009* anul·la la modificació de les Normes subsidiàries de l'Ajuntament de Santiurde de Toranzo promoguda a instàncies d'una empresa formigonera. La modificació convertia en sòl rústic ordinari unes finques prèviament qualificades com a sòl rústic de protecció especial (agropecuària), per “donar al sòl la classificació adequada a l'activitat que s'hi realitzava i, així, no perjudicar l'empresa que s'hi havia instal·lat”. En aquests termes, com es comprèn, la modificació s'antullava sense justificació objectiva i arbitrària, i les potestats urbanístiques s'exercitaven no per donar als terrenys una classificació d'acord amb la seva natura, sinó per possibilitar una activitat industrial que els hi era impossible.

Així, la Sala recorda que l'*ius variandi* que assisteix el planificador urbanístic (reconegut per jurisprudència reiterada —entre d'altres, SSTS de 3 de juliol de 2007, 13 de febrer de 1989 i 8 de maig de 1986—) té els límits propis de qualsevol decisió discrecional i en cap cas no pot justificar l'arbitrarietat pura. En aquest sentit, i pel que fa a la classificació del sòl, ha de tenir-se en compte que la planificació no pot desconèixer els criteris legalment establerts per determinar la natura o mena de terrenys amb els quals es limita la discrecionalitat del planificador. Per això mateix, si d'acord amb els criteris esmentats es va considerar, en un moment donat, que els terrenys tenien un valor agrícola, forestal o ramader o valors paisatgístics, històrics o culturals que justificava la seva classificació com a sòl rústic de protecció especial, no sembla que aquesta classificació pugui alterar-se per privar-los d'aquesta protecció sense acreditar la desaparició dels valors que al seu dia la van propiciar, la qual cosa es tradueix en la necessitat de motivar expressament les raons d'interès públic que justifiquen aquest canvi, de manera que pugui valorar-se'n la suficiència. Aquestes raons són les que troba a faltar la Sala, perquè les que ha al·legat l'Administració (raons de tipus tècnic, empresarials o de creació de llocs de treball) resultaven insuficients per privar els terrenys de la protecció que se'ls havia donat anteriorment.

La *STSJ Cantàbria de 29 de juny de 2009* declara, d'acord amb el dret, l'ordenança municipal sobre protecció de la convivència ciutadana i prevenció d'actuacions antisocials de l'Ajuntament de Santander, impugnada per una associació de defensa dels drets humans que l'entenia com a contrària al principi de seguretat jurídica i al principi

de reserva de llei penal, i perquè l'Ajuntament no tenia competència per dictar alguns dels seus preceptes. Totes les al·legacions de la recurrent, algunes vagues i de pura oportunitat (s'impugna un precepte, per exemple, per haver-lo considerat "poc encertat i eliminable"), van ser rebutjades per la Sala, i es va confirmar la legalitat dels preceptes de l'ordenança que, d'altra banda, pateix de defectes que poden dificultar-ne l'aplicació efectiva, pel que fa al règim sancionador que preveu. Per exemple, el precepte que es refereix als sorolls i a les olors (art. 9: "Tots els ciutadans estan obligats a respectar el descans dels veïns i a evitar produir sorolls i olors que alterin la convivència normal") afecta només els ciutadans, per la qual cosa no sembla que pugui exigir-se l'obligació que enuncia als estrangers, de presència habitual a la ciutat per raons turístiques i acadèmiques. I la utilització de conceptes tan ambigus com el de "respecte al descans dels ciutadans" o el de "convivència normal", tot i que el seu ús sigui d'acord amb el dret, no facilita imposar sancions als avalotadors de la moguda nocturna. Poden dir-se més coses dels sorolls dels vehicles (art. 11.2 "Els conductors i ocupants dels vehicles s'abstindran de posar a potència elevada els aparells de ràdio o equips musicals quan circulin o estiguin estacionats, evitant que les emissions acústiques transcendeixin a l'exterior"). O de la prohibició de cantar o cridar a la via pública "per sobre dels límits del respecte mutu" (art. 13). En vista d'això, per tant, cal preguntar-se si, amb l'entesa actual dels principis de legalitat i tipicitat sancionadores, els tribunals estan disposats a confirmar les sancions que s'imposen, si és que s'imposen, per haver infringit les prohibicions que s'han indicat.

La *STJS Cantàbria de 27 de juliol de 2009* dóna compte d'un nou episodi del conflicte que mantenen els veïns de l'eixample i l'Ajuntament de Santander, pel soroll que generen les activitats hostaleres i recreatives per la tolerància municipal. En aquesta ocasió, l'associació de veïns havia obtingut una sentència d'un jutjat condemnant a l'Ajuntament a clausurar dos cavallets musicals que s'havien establert sense els títols corresponents, en una plaça cèntrica. En compliment de la sentència, l'Ajuntament va dictar l'ordre de clausura, que els propietaris del cavallets van complir voluntàriament (després de dictar-se la sentència van tancar més de sis mesos). Però els mateixos propietaris, simultàniament, van sol·licitar autorització municipal per establir-se novament a la plaça i pocs mesos després els la van concedir. Davant d'aquesta victòria tan pírrica, l'associació va reclamar novament al Jutjat la clausura dels cavallets en execució de la sentència dictada al seu dia, que es va ordenar novament mitjançant la

interlocutòria corresponent. Contra aquesta interlocutòria, l'Ajuntament va interposar el recurs d'apel·lació que resol i estima la sentència que ens ocupa i que va resoldre revocar-lo. Segons el TSJ, la interlocutòria de clausura no s'ajustava al dret perquè la sentència dictada al seu dia podia considerar-se complida, sense perjudici que, havent-hi nou títol per a l'obertura, pogués haver-se impugnat aquest mitjançant l'oportú incident d'execució de sentència, cosa que no va fer l'associació.

Les *SSTSJ Cantàbria de 2 de març i 31 de juliol de 2009* declaren, d'acord amb el dret, l'autorització ambiental integrada atorgada a una fàbrica de ciment, impugnada per diverses associacions veïnals i ecologistes (ARCA entre d'altres). Entre els motius que van al·legar els recurrents poden destacar-se'n dos: un, el de la necessitat de sotmetre a avaluació d'impacte ambiental les instal·lacions de la cimentera, que la Sala resol negativament per haver aplicat el dret transitori; l'altre, la suposada vulneració del RAMINP (per no haver complert el règim de distàncies a nuclis de població previst) que la Sala descarta per haver entès que el control que possibilitaven les disposicions del RAMINP ha quedat comprès en el mateix procediment de l'autorització ambiental integrada i que, per tant, són les disposicions per què ha de regir-se aquesta i els condicionaments ambientals que en resultin (superant el règim tuitiu més simple de les distàncies) el que ha de tenir-se en compte.

La *STSJ Cantàbria de 29 de setembre de 2009* resol el recurs que va plantejar un particular a qui es va denegar l'autorització per haver instal·lat un hivernacle florícola en una finca rústica en l'entorn de protecció del parc natural de Las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (declarat per la Llei 4/2006, de 19 de maig), i que inclou el PORN en la zona d'ús moderat (subjecta a restriccions menors que la zona d'especial protecció). El particular entenia que l'hivernacle era compatible amb aquest ús moderat, com en altres instal·lacions, estables i horts tradicionalment existents a les finques confrontants. El Govern càntabre, al contrari, entenia que la instal·lació no s'acomodava als usos previstos per a aquesta zona, perquè no podia considerar-s'hi tradicional (com ho eren les pastures i els aprofitaments agropecuaris o silvícoles) i podria tenir un impacte rellevant tant des del punt de paisatgístic com ecològic (això últim, per la utilització de plaguicides, d'herbicides i d'adobs químics inherents al mateix sistema de producció), i aquesta va ser la tesi finalment acceptada per la Sala en vista de les determinacions del PORN (que va prohibir, entre altres usos, eliminar la coberta arbòria o arbustiva i construir tancaments i altres estructures artificials), sense que el fet que

puguin haver-se comès infraccions del règim d'ús en altres finques annexes justifiqui l'autorització d'una instal·lació contrària al règim que s'ha esmentat.

A les sentències del Tribunal càntabre esmentades fins aquí s'hi ha de sumar l'error del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Sentència de 4 de setembre de 2009, que confirma en seu d'apel·lació una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Burgos, de 23 de gener de 2009, que no va trobar motius per revocar la decisió de la Comunitat de Castella i Lleó de negar-se a atendre el requeriment que li havia dirigit la comunitat càntabra perquè anul·lés tres autoritzacions per instal·lar sengles parcs eòlics.

La comunitat càntabra pretenia que es declarassin nul·les aquestes autoritzacions per la incompetència manifesta de la comunitat de Castella i Lleó per efectuar les avaluacions d'impacte ambiental que s'exigien per al seu atorgament. Segons aquella, la proximitat dels tres parcs permetria considerar-los, de facto, com un de sol, de manera que, ja que la conjunta potència instal·lada és superior a 50 MW, la seva producció elèctrica hauria d'oferir-se a l'operador de mercat amb la conseqüència legal (prevista, per relació amb l'art. 23 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del sector elèctric, en l'art. 111 del RD 1955/2000, d'1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica) d'haver d'entendre que aquest aprofitament afecta més d'una comunitat autònoma i que, per això mateix, hauria d'haver estat l'Estat qui atorgués l'autorització per instal·lar-los i n'avalués l'impacte ambiental. La comunitat considerava, per tant, que en autoritzar-los separatament per sostreure'ls de la competència estatal, s'havia incorregut en frau de llei i, per això mateix, pretenia que les autoritzacions es declarassin nul·les.

El jutjador d'instància rebutja tal argument (que ja no es reitera en apel·lació) invocant el criteri establert per la jurisprudència del TS (S de 28 de març i 20 d'abril de 2006) sobre el caràcter unitari dels parcs, apreciable quan “els aerogeneradors agrupats necessàriament han de compartir, a més de les línies pròpies d'unió entre si, uns mateixos accessos, un mateix sistema de control i unes infraestructures comunes (normalment l'edifici necessari per a la seva gestió i subestació transformadora). I, sobretot, atès que l'energia resultant ha d'injectar-se mitjançant una sola línia de connexió del parc eòlic en el seu conjunt a la xarxa de distribució o transport d'electricitat —perquè no es complirien els criteris de rendiment energètic i d'un mínim

impacte ambiental si cada aerogenerador pogués connectar-se independentment, amb la seva pròpia línia d'evacuació de l'energia elèctrica produïda, fins al punt de connexió amb la xarxa elèctrica— no és possible descompondre, als efectes jurídics, un parc eòlic projectat amb aquestes característiques per disseccionar-hi diferents aerogeneradors a què donaria un tractament autònom”. Tenint present aquest criteri, doncs, i en vista de la prova practicada, es descarta la consideració unitària dels parcs eòlics d'interlocutòries, reconeixent la individualitat o l'autonomia de cadascun i, per tant, tenint tots una potència instal·lada inferior a 50 MW, la competència autonòmica per autoritzar-ne la instal·lació prèvia avaluació de l'impacte ambiental.

La comunitat càntabra al·legava, també, un defecte formal substancial en el procediment d'avaluació d'impacte ambiental, per no haver-hi donat audiència malgrat ser afectada en raó de l'impacte paisatgístic d'aquests parcs. Però la legislació de Castella i Lleó que regulava específicament el procediment de la declaració d'impacte ambiental, no preveia cap tràmit d'audiència individualitzada, sinó que articulava la participació dels afectats través d'un tràmit d'informació pública que, efectivament, es va realitzar i en què va poder intervenir i al·legar el que considerés oportú l'Administració càntabra que, d'altra banda, per diferents vies, va tenir coneixement de la tramitació i va comparèixer, efectivament, en l'expedient, de manera que, ni en la tramitació de l'avaluació de l'impacte ambiental ni en la tramitació de les autoritzacions no se li va causar cap indefensió real i efectiva que pogués justificar la seva invalidesa.

I, per acabar, aquests errors judicials descarten també que la comunitat de Castella i Lleó hagi ignorat els efectes eventuais sobre la regió càntabra dels parcs instal·lats, quan sí que es van tenir en compte en avaluar l'impacte ambiental i determinar les mesures correctores proposades referides tant al territori burgalès com al càntabre, sense que pugui considerar-se desconeguda, quant a aquest últim, cap necessitat o exigència específica. En aquest sentit, i pel que fa a l'anomenat territori *pasiego*, els òrgans judicials han entès que Cantàbria no ha acreditat suficientment l'existència de cap impacte singular i específic en aquest territori, diferenciat del que es produeix en el territori burgalès, meritori de particular correcció (tingueu en compte, pel que fa al cas, que el territori càntabre afectat no es trobava sotmès a cap règim de protecció específic).

En tot cas, el litigi que acabem de relatar evidencia l'abast supraterritorial dels impactes ambientals, indiferents a les fronteres administratives, i la necessitat de millorar les vies i tècniques de cooperació interadministrativa (inútils si falta la voluntarietat i la

disposició necessàries, de les quals dóna exemple, per cert, la pròpia legislació càntabra, en exigir a l'Administració autonòmica que remeti a les altres comunitats autònomes l'estudi ambiental dels plans o projectes subjectes a control ambiental que puguin tenir efectes significatius sobre el medi ambient —art. 14 Llei 17/2006—), ja de reconsiderar la idoneïtat d'algunes atribucions competencials quan s'evidencia que, per la natural contraposició d'interessos territorials o per pures dificultats organitzatives i de gestió, aquelles vies i tècniques es revelin insuficients per resoldre els conflictes o proporcionar una gestió unitària i eficaç, i es constati la necessitat d'abordar-los des d'un enfocament supraterritorial.

En aquest sentit, sembla oportú —encara que es tractés d'un supòsit diferent, perquè es referia a l'assentament d'un mateix parc eòlic sobre el territori de dues comunitats, no a la projecció de l'impacte ambiental d'un parc establert en una comunitat sobre el territori de l'altra (encara que és evident que, en ambdós supòsits, l'impacte ambiental s'estenia pel territori de les dues regions implicades)—, portar a col·lació els raonaments de la STS de 20 d'abril de 2006 que, després analitzar les regles de delimitació competencial en matèria d'energia, va arribar a la conclusió que corresponia a l'Administració General de l'Estat autoritzar la instal·lació de parcs eòlics quan s'estenguessin pel territori de més d'una comunitat autònoma (en contra el vot particular del Sr. Bandrés Sánchez-Cruzat).